

EDITORIAL: SERVICIOS DE INTELIGENCIA VS. DEMOCRACIA

Bertha García Gallegos*

Los estados requieren de los servicios de inteligencia, antes comúnmente conocidos como “servicios secretos”. Esta afirmación contiene una contradicción en sí misma, porque la producción de inteligencia puede implicar una intromisión en la vida privada de los ciudadanos difícilmente legitimada por ellos. Los estados los necesitan para la toma de decisiones por parte de las autoridades legalmente constituidas en el empeño de proteger en última instancia la permanencia del Estado frente a enemigos externos y los derechos de los ciudadanos ante problemas de la inseguridad y convivencia. Ahora mismo, las diversas formas de prevención ante el terrorismo, delito organizado y otros delitos complejos requieren información anticipada, elaborada como “inteligencia”. El mismo derecho constitucional tuvo que admitir esta contradicción en la figura de los estados de emergencia, como si se tratara de un recurso compatible en el derecho civil con la legítima defensa. De allí, esos recursos deben tener absoluta claridad en su enunciación constitucional, estar controlados y nunca aplicados sino en forma circunstancial para no producir daños irreparables a la democracia.

Tales recursos de última instancia y la producción de inteligencia están virtualmente situados en los límites del derecho. Los servicios de inteligencia no se constitucionalizan y la regla de oro para manejarlos en democracia es que “sus estructuras, agentes y productos” no estén ni tan lejos del poder político que termine por hacer su información irrelevante; ni tan cerca de ese poder que terminen manipulados. En teoría, el moderno constitucionalismo asume al

Estado como protector de derechos en primer lugar y respetuoso con los principios básicos democráticos. No hay democracia y libertad donde estos principios no estén suficientemente reconocidos y protegidos.

En América Latina, con profundas desigualdades sociales, las instituciones son inestables y los controles democráticos casi inexistentes. Usualmente, las medidas de cambio económico y social son aplicadas con grandes dosis de autoritarismo que involucran a los servicios de inteligencia con medidas restrictivas de la oposición política, con lo que pierden su razón de ser. Ha sido difícil llegar a una concepción neutra de la inteligencia como información económica, política, social y cultural producida por servicios especializados y orientada hacia la toma de decisiones en el ámbito público.

Los servicios de inteligencia deben sujetarse a los mismos controles democráticos que los demás actos del ejecutivo, sobre todo al control parlamentario y al control de la legalidad. El problema es que esos controles quedan al vaivén de las inestabilidades políticas y escasa vocación democrática de los gobernantes, de cada país, pues hasta el momento no existen suficientes parámetros democráticos en el derecho internacional sobre el control de la inteligencia. Existen unas pautas generales que se repiten en el control democrático de los servicios de inteligencia, pero no presuponen obligaciones. Este es un gran vacío en el derecho internacional.

*Socióloga, profesora principal de la PUCE y Directora del Programa Democracia, Seguridad y Defensa.

01 EDITORIAL
Servicios de
Inteligencia vs.
Democracia
Bertha García

02 Perú:
¿Reinventando
Inteligencia?
Andrés Gómez de la Torre

05 ¿En qué falla la
inteligencia
latinoamericana?
1era. Parte
José Manuel Ugarte

09 REPORTAJE
Los servicios de
inteligencia
sudamericanos
en alerta roja
Susana Espinosa Soto

11 CRONOLOGÍA
Dic. 2014 - Mar. 2015

16 RESEÑA
Redes ilícitas y Política
en América Latina

PERÚ: ¿REINVENTANDO INTELIGENCIA?

Andrés Gómez de la Torre Rotta*

Las reformas del nuevo siglo

En el Perú, tras la caída del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), en el año 2000, el país transitó por un sobresaltado proceso de reconstrucción (Gómez de la Torre, 2004)¹ de su sistema de Inteligencia.² Al cabo de 15 años de la desactivación y cierre del SIN, los peruanos registramos en democracia, la aparatosa plusmarca de doce jefes de Inteligencia en cuatro gobiernos y tres leyes reguladoras del sector: la Ley Ordinaria N° 27479 del 2001, la Ley Ordinaria N° 28664 del 2006 y el Decreto Legislativo N° 1141 del 2012.

El inicio del nuevo siglo XXI en el ámbito latinoamericano se caracterizó por el empeño en conformar comisiones reformadoras para remodelar el sector. Durante la transición mexicana del año 2000 del PRI al PAN liderada por Vicente Fox, se trató de readecuar su Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN); en 2001 Argentina promulgó la Ley de Inteligencia 25.520. Durante la década pasada, nuevas leyes de Inteligencia, comisiones reformadoras y comisiones evaluadoras para elaborar diagnósticos institucionales, fueron moneda corriente en México (2001), Perú (2004), Colombia (2005), y Ecuador (2009) (Gómez de la Torre, 2011, pp.180-190).³ Se trataba de encuadrar en el estado de derecho al poder estatal encubierto, que probablemente hasta hoy representan las agencias de Inteligencia. No es casual que en la región las agencias secretas insistan con la clásica propensión a modelar sus propias agendas, asumir la doble condición de productores y usuarios de sus documentos, sustituir a los tomadores de decisión, y convertirse en *policy makers*. El reciente caso argentino, con el cierre de su Secretaría de Inteligencia (SI) y la creación de la nueva Agencia Federal de

Inteligencia (AFI),⁴ es un ejemplo dramático, pero realista.⁵

Escenario actual. ¿Funcionan los controles?

La situación actual de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI) se asemeja en mucho al escenario del 2004, particularmente en el empleo de dos palabras por el gobierno: “desactivación” y “reestructuración”. El entonces Presidente Alejandro Toledo tras el descrédito en que cayó el Consejo Nacional de Inteligencia (CNI), promulgó un simple Decreto Supremo en marzo del 2004 para reorganizarlo, en esa oportunidad por noventa días, y conformó paralelamente una *Comisión Especial*, que elaboró un Informe situacional (diagnóstico) sobre la Inteligencia Nacional. Redactó además un Proyecto de Ley para la creación de una Agencia de Inteligencia Estratégica (AIE) (Gómez de la Torre, 2013, p.18),⁶ que el poder ejecutivo hizo suya al introducir algunas modificaciones —siendo Carlos Ferrero el Presidente del Consejo de Ministros—, para luego enviarla al Congreso. Dicho proyecto fue acumulado, a modo de insumo, junto a otras trece iniciativas legislativas dictaminadas por la entonces *Comisión de Defensa Nacional e Inteligencia* que culminó con la promulgación de la Ley Ordinaria N° 28664 del SINA y de la DINI de enero del 2006 (Gómez de la Torre, 2010, pp. 54-57).⁷ En dicha norma se establecieron, con mayor precisión, controles públicos externos a Inteligencia, específicamente desde el Poder Legislativo, mediante una comisión ordinaria específica de Inteligencia y el Poder Judicial. Al momento se aprecia que no ha sido muy satisfactoria la experiencia de la aplicación del control parlamentario sobre la DINI desde el 2006 a la fecha: “tiras” y “aflojas” entre fiscalizadores y

jefes de Inteligencia, o interpretaciones *sui generis* para acceder a información clasificada caracterizó este ángulo del sector.

En la actualidad, al “reestructurarse” (Gómez de la Torre, 2004),⁸ esta vez por 180 días, la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI) se conformaría una “*Junta de Notables*” (Rospigliosi, 2015)⁹ cuya tarea específica deberá esclarecerse. Es posible que la discusión inicial oscile entre la elaboración de un nuevo marco normativo de Inteligencia, en cuyo caso pasaríamos a tener cuatro leyes del ramo en quince años, o bien, como en Argentina tras el cierre de su Secretaría de Inteligencia,¹⁰ se proponga realizar modificaciones puntuales al vigente Decreto Legislativo N°1141 promulgado vía Facultades Delegadas en el mes de diciembre del 2012, que regula hoy la inteligencia peruana y que exhibe escasos dos años de vigencia. No es realista pensar que, legislativamente, hay mucho más que introducir, añadir o “mejorar” en materia de controles públicos externos en la norma vigente.¹¹

¿El papel del Congreso?

Por otro lado, la idea de ratificar al Director Nacional de Inteligencia desde el Congreso no es nueva y plantea ciertas dificultades; en principio, el SINA y DINI no deberían regularse —y nunca lo fueron— por Ley Orgánica, y mucho menos adquirir jerarquía constitucional. Una posibilidad intermedia a la propuesta sería implementar una suerte de *check in list* o *placet* de la Comisión de Inteligencia, como paso previo a la designación. Con un Proyecto de Ley en preparación desde la Presidencia de Consejo de Ministros (PCM), con la idea aparente de modificar el Decreto Legislativo N° 1141, no tendría mucho sentido la labor de la “*Junta de Nota-*

bles” en un escenario que marca la diferencia con el 2004: Informes de dos comisiones parlamentarias (Inteligencia y fiscalización), con la posibilidad de pronunciamientos en minoría, cuyas conclusiones tendrán que ser, forzosamente, acumuladas en el análisis y evaluación de la junta complicando su derrotero. ¿Se reforzarán las prohibiciones para evitar el *outsourcing* de Inteligencia paralela, evitando nuevos casos como *BTR*?¹² En suma, una próxima reestructuración de Inteligencia particularmente compleja, en extremo delicada, que requerirá especialmente de la máxima prudencia, en la que asoma a la visión de ciertos ex trabajadores y cuadros del SIN de los años noventa; aquellos se frotan las manos celebrando la crisis y pavimentan sus añejas aspiraciones de retorno, pregonando el colapso de la experiencia en democracia.

La Inteligencia, ¿un órgano netamente civil?

Fernando Rospigliosi, ex jefe del Consejo Nacional de Inteligencia (CNI) en el año 2003, propuso en un artículo periodístico volver al Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), de los años ochenta, concretamente de hace 25 años previo a la incorporación de Vladimiro Montesinos. Ello supondría recrear una DINI de bajo perfil institucional, pero a diferencia de aquellas épocas, plantea convertirla en un órgano netamente civil y de coordinación, sin militares ni policías, limitado personal (propone unas 50 personas), y sin facultades operativas (Rospigliosi, 2015). Resulta ser algo parecido a la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI), de Chile que tiene un número de funcionarios señalado expresamente en su norma aplicable (Ley N° 19.974, artículo 15).¹³ Desde luego es una opción real y para analizar especialmente frente a obvias circunstancias... ¿la hará tangible un próximo gobierno?, ¿se convertirá en parte de algún Plan de Gobierno con miras al 2016?

Los indicadores que disponemos no mostrarían que el actual gobierno apueste o se oriente en esa dirección. Conviene recordar, efectivamente, los años ochenta son una década que registra, pese a todos sus lados negativos y posibles cuestionamientos, la más sólida institucionalización de la Inteligencia peruana (Medrano, 2014).¹⁴ Con Fernando Belaúnde Terry en el poder, en el año 1984 fueron promulgados los Decretos Legislativos N° 270 y N° 271 que intentaron mejorar y perfeccionar la estructura y coordinación intra-estructural del entonces SIN. También sería creada, ese mismo año, la Escuela de Inteligencia Nacional (ESIN), que inició cursos anuales de Inteligencia estratégica y de agentes en 1985 (Gómez de la Torre, 2014, p. 105-125).¹⁵ Ciertamente es que hubo más espacio para civiles con *expertise*. El Comité de Asesores, COA-SIN de la década de los ochenta estuvo conformado, entre otros, por Rafael Merino Bartet y Francisco Loayza Galván, ambos venían del Comité de Asesores del Ministerio de Guerra, conformado en el primer quinquenio de los setenta donde ya pululaba Vladimiro Montesinos, ahí laboraban en su momento, de manera directa, con los Ministros Edgardo Mercado Jarrín y Jorge Fernández Maldonado Solari.

De allí se recuerdan técnicas de trabajo como la “*hoja del rey*” o “*página de oro*”, aquel sucinto y escueto Informe Estratégico diario entregado a primera hora de la mañana al mandatario. También los ochenta fue la década de mayor reclutamiento de personal civil. Profesionales con distintas carreras sirvieron como analistas de Inteligencia en todos los campos o dominios de la seguridad nacional, especialmente los no militares. Así se potenciaron las Direcciones Nacionales de Frente Interno y Frente Externo, columnas vertebrales de la tradicional estructura del SIN. Todo ello coincidía con la visión francesa de su escuela contra-subversiva, de notable

influencia en la decisión de creación del SIN hace 55 años atrás, en 1960, por el Presidente Manuel Prado (Gómez de la Torre, 2012),¹⁶ impulsada y respaldada por jerarcas claves francófilos en el ejército de la época: generales Alfredo Rodríguez Martínez, el reorganizador institucional; los sucesivos Ministros de Guerra: Alejandro Cuadra Ravines, Víctor Tenorio Hurtado y Julio Doig Sánchez; el jefe del SIN y Ministro de Gobierno y Policía de la Junta Militar de 1962, Juan Bossio Collas.

Eran tiempos de necesidad apremiante el escudriñar y hurgar en el mundo “civil”, para conocerlo a fondo y así enfrentar con éxito este extraño y nuevo fenómeno que representaba, para los militares, la guerra no convencional (“subversiva”, “insurgente”, “revolucionaria”) de la que poco o nada sabían, generando harta preocupación. Pero aquellos militares de la época no dejaban, en cierto modo, de tener razón; para 1965 brota un foco insurreccional, más guevarista y de línea cubana, reprimido por el general Armando Artola Azcárate al frente de la Inteligencia del Ejército (SIE). Azcárate sería luego Ministro de Gobierno y Policía del gobierno revolucionario. Ya en los ochenta, tiempos extremadamente complejos de lucha contra el PCP-SL y el MRTA, fue creada durante el segundo quinquenio, en el ámbito de la reforma del sector interior del primer gobierno de Alan García, la Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior (DIGIMIN). De allí se hizo visible un personaje olvidado, el general PIP¹⁷ Edgar Dioniso Luque Freyre, también abogado, el que años después sería reseñado como una suerte de “*proto* Edgar Hoover” autóctono y que dirigiría la inteligencia hasta entrada la década de los noventa.

De allí se recordaría, con más intensidad, la vieja técnica de investigación y ficha básica, conocida en Argentina en su argot de espionaje como “carpeta”.

Los ochenta también son recordados como tiempos de clásicas pugnas interinstitucionales, incluidos sabotajes recíprocos, entre el Ejército y la Marina de Guerra por asumir y conducir la jefatura de Inteligencia. Fernando Belaúnde, dada la desconfianza que le generaba el antiguo Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE) debido al golpe militar del 3 de octubre de 1968, designaría al frente del SIN, entre 1983 a 1985, a mandos navales, cuestión que ya no cabría en un futuro escenario de conducción civil neta del ente rector de Inteligencia.

Propensión al mal empleo de la inteligencia

Innegable es que, no sólo las dictaduras militares o autocracias políticas son propensas al mal empleo o sub-empleo de sus servicios de Inteligencia. En los años sesenta el Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), bajo la jefatura del belaundista general EP Carlos Linares Molino hubo colaboración operativa en la intolerante y risible caza de brujas de típica Guerra Fría, llevada a cabo desde el entonces Ministerio de Gobierno y Policía, de la que se recuerda especialmente la quema de libros de cierta ideología específica, mientras que en estos quince años de democracia hemos apreciado en el Perú cómo diversos personajes públicos, especialmente políticos y periodistas, han sido objeto de intentos, o efectivas acciones, a modo de campañas y operativos de desprestigio, preparadas desde las entrañas de las entidades secretas. Conviene recordar también que no hay mucho espacio para la innovación o reinención del sector; las modificaciones a la norma vigente de Inteligencia imposibilitan introducir mayores cambios o transformaciones especialmente para con las culturas organizacionales, comportamientos típicos, formación estructural y conductas innatas que están enraizadas y empoderadas por décadas, quizá desde tiempos de Alejandro Esparza Zañartu, aquel controversialmente famoso Ministro de

Gobierno y Policía durante el “óchenio” militar de la década de los cincuenta liderada por el general y dictador Manuel A. Odría. Así, no es difícil descifrar la razón por la que el conservador Presidente Constitucional Manuel Prado y Ugarteche, abiertamente alineado a los Estados Unidos, decidiera en enero de 1960, en pleno auge y furor de la guerra fría, de la insurrección armada en Cuba y la contención al comunismo, crear el Servicio de Inteligencia Nacional, SIN, bajo una sigilosa, encubierta, pero cuidadosamente preparada, recomendación del ejército.

Como epílogo: nueva reorganización

Finalmente, el gobierno del Presidente Ollanta Humala declaró formalmente en *reorganización* a la Dirección Nacional de Inteligencia. Lo hizo mediante Decreto Supremo N° 013 – 2015 – PCM publicado en el diario oficial “El Peruano” el 1° de marzo de 2015. El dispositivo conforma una *Comisión Reorganizadora de Alto Nivel*, integrada por tres personas, prescindiendo del concepto de *Junta de Notables* empleado en un primer momento por la Presidenta del Consejo de Ministros, abogada Ana Jara. El alcance del mandato de tal instancia está claramente definido y acotado por el artículo 2°:

“tendrá como objeto evaluar y proponer las normas que resulten necesarias para su reorganización en los aspectos de profesionalización, racionalización; y de modificación de los aspectos operativos, administrativos, técnicos, normativos, procesos y de procedimientos...”

Complementa para tales efectos el artículo 4° en el sentido que:

“La Comisión Reorganizadora tendrá un plazo de vigencia de ciento cincuenta (150) días calendario... al término del cual deberá presentar a la titular de la Presidencia del Consejo de Ministros el respectivo Informe Final que deberá contener las corres-

pondientes propuestas y recomendaciones”.

Cabe anotar que en éste párrafo final asoma, más de diez años después, el mismo procedimiento que estableció, durante el año 2004, la Comisión Especial para la reforma del entonces Consejo Nacional de Inteligencia, CNI (su *Informe Final* se presentó en julio de 2004). Algunos con acierto reseñan que 5 meses resulta ser excesivo para un Informe que no tendría tampoco mucho de “nuevo” o innovador para el sector. Es claro que la decisión del gobierno se encuentra íntimamente ligada a las reiteradas y diversas denuncias hechas por la prensa desde el mes de enero de 2015 sobre presunta actividad de la DINI en asuntos de espionaje político doméstico; a ello se sumó el reciente caso conocido por medios de comunicación acerca de las acciones de espionaje que habrían efectuado las Fuerzas Armadas de Chile, concretamente su Armada, en contra de la Marina de Guerra del Perú en el contexto del proceso llevado a cabo ante la Corte Internacional de Justicia (CJI), para resolver la controversia marítima bilateral, cuya sentencia fue emitida en enero de 2014.

Lástima que el reducido y propositivo debate público actual sobre el tema y especialmente algunos procedimientos de trabajo para ésta nueva “reorganización” de la inteligencia peruana gire alrededor de revivir experiencias del pasado, diseñar políticas de *deja vú*, o actuar en modo retro, no encarando aspectos de futuro, contrario a principios de prospectiva, especialmente a poco más de dos años de una bien promocionada promulgación (diciembre de 2012), del Decreto Legislativo N° 1141, de “*fortalecimiento*” del Sistema de Inteligencia Nacional.

* Abogado peruano, con Maestría en Política Internacional y Economía Internacional en la Escuela de Gobierno y Relaciones Internacionales, Universidad de Belgrano, Buenos Aires. Estudios en el CHDS-

NDU, Washington. Diplomado en Ciencia Política por la Universidad de Salamanca, España. Analista de Inteligencia. Ex Asesor en Comisiones Investigadoras y de la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno e Inteligencia del Congreso de la República. Ex Director y actual docente en la Escuela de Inteligencia Nacional (ENI-DINI). Miembro Asociado e Investigador del Instituto de Estudios Internacionales (IDEI-PUCP).

Notas:

1. Gómez de la Torre, A. (2004). "Perú: Frustraciones en los Intentos por Reconstruir su Sistema de Inteligencia". En: Swenson, R., y Lemozy, S. (Comp.). *Profesionalismo de Inteligencia en las Américas*. Edición revisada. Washington D.C.: Joint Military Intelligence College's Center for Strategic Intelligence Research, pp. 155-186.
2. "las transiciones a la democracia en América del Sur y los procesos post-autoritarios dejaron varios temas pendientes a modo de cabos sueltos de la nueva agenda pública en estado de derecho, particularmente en lo que respecta al sector de la seguridad nacional. Verdadero agujero negro constituyó la entonces elaboración de las políticas nacionales y normas legales para el sector inteligencia, actividad sumamente cuestionada y estigmatizada, especialmente vinculada a los clásicos regímenes de seguridad nacional", véase: Gómez de la Torre, A. (2015). "Los servicios secretos en América Latina siguen en la zona oscura", disponible en: <http://www.infolatam.com/2015/02/13/los-servicios-secretos-en-america-latina-siguen-en-la-zona-oscura/>; último acceso 18 de febrero del 2015.
3. Gómez de la Torre, A. (2011). "Comisiones reformadoras de Inteligencia: experiencias latinoamericanas recientes (2001-2009)". En: Fredy Rivera Vélez (coord.), *Inteligencia estratégica y Prospectiva*. Quito: FLACSO-SENAIN-AECID, pp. 177-196.
4. Infojus (2015). Qué dice el proyecto para crear la Agencia Federal de Inteligencia, 30 de enero. Disponible en: <http://infojusnoticias.gov.ar/nacionales/exclusivo-el-proyecto-para-crear-la-agencia-federal-de-inteligencia-7295.html>; último acceso 25 de febrero del 2015.
5. Centro de Estudios Legales y Sociales (2015). Avance y retrocesos en la Ley de Inteligencia. Disponible en: <http://cels.org.ar/common/documentos/CELS%20Observaciones%20al%20proyecto%20de%20reforma%20AFI.pdf> último acceso 18 de febrero del 2015.
6. Gómez de la Torre, A. (2013). *Política y Legislación de Inteligencia en el Perú e Iberoamérica: Tendencias y Perspectivas*. Lima: IDEI – PUCP.
7. Gómez de la Torre, A. (2010). "Evolución reciente y contextos de la legislación de Inteligencia: El caso del Perú". En: Chamorro, L. (editora). *Sistemas de Inteligencia comparados: Aportes al caso peruano*. Lima: IDEPE, pp. 37-116.
8. "El concepto tiene una connotación administrativa... puede ser transitoria, eventual pero dadas las circunstancias también lo es permanente... y puede normalmente no tocar temas de fondo, sino más bien organizacionales de forma...". Véase: Gómez de la Torre, 2004, p. 163.
9. Rospigliosi, F. (2015). "Anita modosita", *El Comercio*. Disponible en: <http://elcomercio.pe/opinion/columnistas/anita-modosita-fernando-rospigliosi-noticia-1791562>; último acceso 18 de febrero del 2015.
10. Di Santi, M. (2015). "¿Se parece la reforma de la ex SIDE a lo que se hizo en Colombia?". Disponible en: <http://www.chequeado.com/el-explicador/2342-ise-parece-la-reforma-de-la-ex-side-a-lo-que-se-hizo-en-colombia.html>; último acceso 19 de febrero del 2015.
11. Referente a los mecanismos de control, véase: Medrano, A. (2013). "Análisis de los mecanismos de control en los Sistemas de Inteligencia en el Perú, 1990 – 2013", *Pensamiento Conjunto*, revista de la Escuela Conjunta de las Fuerzas Armadas. Lima: Oficina de Información de la Escuela Conjunta de las Fuerzas Armadas, año 1, número 3, diciembre, pp. 65-72.
12. *El Comercio* (2013, 2014). Noticias de Caso BTR, Disponible en: <http://elcomercio.pe/noticias/caso-btr-307315>; último acceso 25 de febrero del 2015.
13. Chile (2004). Ley N° 19.974, Sobre el Sistema de Inteligencia del Estado y crea la Agencia Nacional de Inteligencia. Biblioteca del Congreso Nacional.
14. Medrano, A. (2014). "Sistemas de Inteligencia en el Perú. Historia y democratización, 1960-2014". *Pensamiento Conjunto*, revista de la Escuela Conjunta de las Fuerzas Armadas. Lima: Oficina de Información de la Escuela Conjunta de las Fuerzas Armadas, setiembre, edición N° 2, año 2, pp. 73-80.
15. Gómez de la Torre, A. (2014). "Escuelas de Inteligencia: Repensando y repasando la formación pública en el Perú y Latinoamérica", *Inteligencia y seguridad: Revista de análisis y prospectiva*, número 15, enero – junio, pp. 105-125.
16. Gómez de la Torre, A. (2012). "Control y fiscalización de inteligencia: Una breve mirada iberoamericana". En: Fernández, J., et al. (coord.). *Cuestiones de Inteligencia en la Sociedad Contemporánea*. Madrid: Ministerio de Defensa de España, pp. 77-92.
17. La entonces Policía de Investigaciones del Perú (PIP) era conocida como "Código 2", hasta antes de la unificación policial y reestructuración del Ministerio del Interior de 1987 durante el primer gobierno de Alan García.

¿EN QUÉ FALLA LA INTELIGENCIA LATINOAMERICANA? (1 era. parte)

José Manuel Ugarte*

1. Una sucesión de episodios negativos para la Inteligencia latinoamericana.

En los últimos meses, una sucesión de escándalos en diversos países latinoamericanos producidos por alegadas irregularidades en la actividad de inteligencia ha reactualizado perennes interrogantes respecto de las características de las estructuras de inteligencia latinoamericanas. Se habla de la necesidad de realizar una nueva serie de reformas en la región, para que tales estructuras tengan características similares a las de aquellos países que han logrado conciliar la ple-

na vigencia del sistema democrático, con la necesaria eficacia en la realización de la actividad de inteligencia.

Sin duda el caso argentino ha sido el más impactante, por tratarse del país que estableció el primer control legislativo específico de la actividad de inteligencia en la región (1992) y ser considerado como uno de los países que ha realizado mayores avances legislativos en las áreas de defensa, seguridad e inteligencia. Aunque el contenido de las denuncias periodísticas no resultó demasiado sorprendente para quienes

venimos señalando desde hace varios años la necesidad de perfeccionar la legislación y sobre todo los controles existentes,¹ las noticias sobre problemas existentes en la actividad de inteligencia que venían desde Buenos Aires tuvieron repercusión en la región y en el mundo.

Pero no fueron, por cierto, las únicas. En Perú, las denuncias de interceptaciones ilegales y seguimientos, atribuidas a la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI) aunque negadas por ésta, planteadas al inicio por el ex ministro Fernando Rospigliosi en mayo de 2013,² y

luego también por Carlos Basombrío,³ en las que se sostenía la existencia de una nueva campaña de reglaje⁴ contra los políticos de oposición, a cargo del referido organismo, recrudecieron durante el mes de enero del corriente, atribuyéndosele inclusive el haber vigilado a la propia vicepresidenta de la República, Marisol Espinoza.⁵ También a políticos de oposición, como Jorge del Castillo, Miguel Hidalgo, Jaime Mur Campoverde, Jorge Paredes Terry, y Natalie Condorí,⁶ por lo que se llegó a anunciar incluso el cierre por 180 días del organismo, para proceder a su reestructuración.⁷

Estos hechos traen inevitablemente a la memoria lo sucedido en Colombia con las chuzadas conocidas a principios de 2014 a través de la edición web de la revista *Semana*⁸ —que anteriormente había realizado importantes revelaciones acerca de actividades ilegales de inteligencia en el pasado, por parte de la Policía Nacional y del DAS— Tales ilegalidades habrían *sido cometidas* por un elemento o *fachada* del organismo de inteligencia del Ejército del país, *Andrómeda*, que reunía a personal militar con civiles contratados, fundamentalmente *hackers* dedicados a la obtención de claves de acceso de correos electrónicos y de teléfonos celulares. Entre sus objetivos se encontraban altos funcionarios involucrados en el proceso de paz con las FARC, particularmente el Alto Comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo, el Alto Comisionado Presidencial para la Reintegración, Alejandro Eder, y el Jefe de Delegación Humberto de la Calle —reflejando el deseo militar de conocer la situación del proceso de paz— entre otras muchas personas, sin autorización judicial.⁹ Asimismo, el descubrimiento casi simultáneo de la realización de interceptaciones ilegales desde la *Sala Gris*, ámbito de interceptaciones de la Fiscalía Nacional operada por la inteligencia militar colombiana, aspectos combinados con la difusión ilegítima a civiles de documentos de alta clasificación de la inteligencia militar del país,

utilizada para fines políticos o incluso terminando en manos de inteligencia de gobiernos extranjeros.¹⁰ Actividades como venta de información, posesión por parte de la Central de Inteligencia Militar de los correos electrónicos de gran número de periodistas y otros, quedaron en evidencia o en sospecha. Hemos mencionado casos de tres países, que no agotan la cuestión, pero que aparecen como los más significativos para mostrar las debilidades que, entendemos, padece la actividad de inteligencia en Latinoamérica.

2. Argentina: Actividad policial y actividad de inteligencia.

Con unanimidad en la condena, aunque desde muy diversas posiciones, se atribuyeron en esta oportunidad a través de publicaciones periodísticas, tanto oficialistas como opositoras, a la Secretaría de Inteligencia (SI) —órgano de inteligencia civil fundamental del país, que dirige el Sistema de Inteligencia Nacional o a personal integrante de aquél, acciones como controlar a jueces de la Justicia Federal argentina,¹¹ y utilizar estas influencias para obtener el progreso de causas penales contra la Presidenta de la Nación.¹² También el procurar a través de sus influencias judiciales la declaración de nulidad del *Memorándum de Entendimiento* firmado entre Argentina e Irán con relación a la causa relativa al atentado terrorista contra la sede de la Asociación Mutual Israelí Argentina (AMIA),¹³ defensa de funcionarios públicos a través de estudios jurídicos vinculados, y ante jueces afines al organismo,¹⁴ extorsión a jueces federales no afines, para sumarlos a sus filas,¹⁵ escuchas telefónicas ilegales¹⁶ a miembros de la oposición y a funcionarios oficiales, etc.

En esas circunstancias, tuvo lugar la decisión adoptada por la Presidenta argentina de exigir la renuncia de las dos autoridades políticas de la SI.¹⁷ De ello derivó la asunción como nuevas autoridades del hasta ese entonces Secretario General de la Presidencia Oscar Parrilli,

y del hasta el momento Jefe de Gabinete del Ministerio de Justicia Juan Martín Mena, ambos sin antecedentes en materia de inteligencia, pero personas de confianza política de la Presidenta.

Casi inmediatamente siguió el pedido de renuncia¹⁸ al Director General de Operaciones de la SI, Antonio Horacio Stiuso, funcionario de carrera que desde hacía más de diez años ejercía el poder real en el organismo, por la información de que disponía, sus relaciones con el personal y con cuadros directivos del organismo, y múltiples vinculaciones políticas, tanto en el oficialismo como en la oposición.

La muerte, en circunstancias aún no aclaradas, el 18 de enero de 2015, del Fiscal General a cargo de la Unidad Especial AMIA, Alberto Nisman, quien trabajaba estrechamente vinculado a Stiuso, tras presentar una denuncia contra la Presidenta argentina, a quien atribuyó —algunos estiman con pobre fundamento— buscar la impunidad, a través del ya referido *Memorándum de Entendimiento*, de los dirigentes iraníes acusados por Nisman (en base a informes de inteligencia) determinó el enrarecimiento del clima político del país. Por su parte, la Presidenta Cristina Fernández, dirigió una alocución por cadena nacional al país, anunciando la disolución de la SI y la creación de un nuevo organismo de inteligencia, al tiempo que señalaba la existencia de un proyecto de ley de reformas en materia de inteligencia, y su envío para el tratamiento en sesiones extraordinarias.¹⁹

Del examen del proyecto de ley,²⁰ así como del dictamen emitido sobre este por las comisiones competentes del Senado,²¹ y de la media sanción otorgada por el Senado,²² surgen aspectos merecedores de detenido examen.

Cabe señalar que se trata de un proyecto de reformas a la actualmente vigente Ley N° 25.520 de *Inteligencia Nacional*. Como se recordará²³ el *Sistema de*

Inteligencia Nacional (SI) argentino se caracterizaba por poseer un organismo de inteligencia civil dependiente directamente del Presidente de la Nación, con amplias facultades en materia de inteligencia interior, exterior y contrainteligencia, y la dirección del Sistema de Inteligencia Nacional, poseyendo su titular rango de Ministro. Bajo su dependencia funcional y dependiendo del Ministerio de Seguridad, se encontraba un organismo de inteligencia criminal, la *Dirección Nacional de Inteligencia Criminal* (DIC) que ejercía además la dirección funcional y coordinación de los órganos de inteligencia de las instituciones policiales y fuerzas de seguridad nacionales, constituyendo el *Subsistema de Inteligencia Criminal* (SICRI) por Resolución N° 1014/2011 del Ministerio de Seguridad, y la *Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar* (DNIEM), quien a su vez dirige la actividad de los organismos de inteligencia de las Fuerzas Armadas, constituyendo con ellas el *Sistema de Inteligencia de Defensa*, creado por Resolución N° 381/2006 del Ministerio de Defensa.

Si bien en el proyecto se establece la disolución de la SI, se crea en su reemplazo un nuevo organismo de inteligencia, la *Agencia Federal de Inteligencia* (AFI).

Al momento, según el proyecto y dictamen referidos, el personal del organismo *disuelto* es transferido íntegramente al nuevo organismo de inteligencia que se crea, así como los bienes, presupuesto vigente, activos y patrimonio, con la única excepción del personal y bienes de la *Dirección de Observaciones Judiciales* (DOJ), órgano de la SI al que la Ley N° 25.520 asignaba la exclusividad de la materialización de las interceptaciones de comunicaciones, tanto las ordenadas por jueces en el marco de una investigación judicial, como las solicitadas por la SI en el marco de las actividades de inteligencia y contrainteligencia. Este órgano es transferido al Ministerio Público, y es la medida más trascendente, y a nuestro juicio más acertada del nue-

vo texto.²⁴ La transferencia del personal de la SI a la AFI es dispuesta incluso manteniéndose los respectivos niveles, grados y categorías de revista escalafonarios... *sin perjuicio de la asignación de nuevas funciones derivadas de los sustanciales cambios previstos en esta ley...* (Artículo 23 tercer párrafo del dictamen) sustancialmente respecto de su predecesora, al agregarse a su competencia para producir inteligencia nacional, la relativa a ...*la producción de inteligencia criminal referida a los delitos criminales complejos correspondientes a terrorismo, narcotráfico, tráfico de armas, trata de personas, ciberdelitos, y actos contra el orden económico y financiero, así como los delitos contra los poderes públicos y el orden constitucional, con medios propios de obtención y reunión de información...* (artículo 8° inciso 2 del nuevo texto).

Por otra parte, el texto original del artículo 9° de la Ley N° 25.520, que establecía la competencia de la *Dirección Nacional de Inteligencia Criminal* (DIC) para producir *inteligencia criminal* es sustituido por un texto que dispone que se transfiera a la nueva AFI ...*las competencias y el personal de la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal... referidas a las actividades de inteligencia referidas a los delitos federales complejos y los delitos contra los poderes públicos y el orden constitucional...*

Esto significa una importante limitación para la DIC, que producía inteligencia criminal²⁵, constituida por un cuerpo de analistas que empleaba la información suministradas por las policías y fuerzas de seguridad, a cuyas bases de datos tenía acceso, además de la suministrada por otras bases de datos estatales y por fuentes públicas.

Sin embargo, fundamentalmente, su sustitución parcial por la SI-AFI plantea a nuestro juicio, un dilema.

En efecto; la producción de inteligencia criminal con medios propios de obtención y reunión de información (artículo 8° inc. 2 de la ley, conforme a la media

sanción) implica otorgar a un organismo de inteligencia históricamente dedicado a la producción de inteligencia política, competencias para elaborar inteligencia criminal sobre delitos federales complejos, haciéndolo además, con su propio personal y medios secretos. Ello, si no es cuidadosamente controlado, puede traducirse en el incremento de la actuación de la SI-AFI en investigación criminal, actividad que le permitiera el artículo 4 inciso 1 de la Ley N° 25.520 si le fuera requerida por juez competente en causa sometida a su jurisdicción, y cuyo ejercicio supone la presencia en el proceso penal de personal de inteligencia cuya especialidad no es el derecho, sino medios secretos, no verificables por la defensa.

También el eventual incremento de tal actuación puede derivar en el correlativo incremento de la influencia sobre jueces federales, que diera precisamente motivo a los cambios dispuestos por la Presidenta. El requisito establecido por la media sanción, de que el requerimiento judicial sea *fundado* (artículo 4°, inciso 1) no parece cambiar tal conclusión. Tampoco, que a tal cooperación sean aplicables ...*las reglas procesales...* dado que no parece sencillo que tales reglas puedan ser cumplidas acabadamente por personal secreto de inteligencia, ni como tal personal puede transformarse en personal policial y continuar poseyendo aptitudes de personal de inteligencia. Las experiencias latinoamericanas de organismos que cumplían ambas funciones, como el DAS colombiano o la *Federal de Seguridad* mexicana, no han sido fructíferas.

Cabe destacar que la inteligencia criminal es practicada, en aquellos países desarrollados institucionalmente, por personal policial y por organismos de inteligencia criminal, integrados fundamentalmente por personal policial y por analistas sin estado policial. La Dirección Nacional de Inteligencia Criminal estaba constituida por analistas, pero obtenía información a través de las policías y fuerzas de seguridad, de fuen-

tes públicas y de registros estatales, sin introducir en el proceso penal personal de inteligencia.

La decisión comentada debilita la esencial diferencia entre actividad de inteligencia y seguridad pública, al asignarse a un organismo de inteligencia, la producción de inteligencia criminal –parte, en realidad, de la actividad de seguridad pública o policial, lo que no siempre se tiene presente en Latinoamérica.²⁶

De todos modos, siempre es posible con una enérgica conducción política bien asistida profesionalmente evitar o disminuir tales inconvenientes, al limitar a casos excepcionales la actuación de la *SI-AFI* en investigación criminal, y actuar eficazmente en hacer desaparecer la relación irregular del organismo con la justicia federal, que diera lugar a los inconvenientes antes referidos, entre otros aspectos.

En tal sentido, la decisión de separar a Stiuso y a algunos de sus colaboradores evidencia esa voluntad de ejercicio de la conducción política, al concluirse con la carrera de quien se suponía invulnerable por la gran cantidad de información que poseía de miembros de la *élite* política argentina y por su red de contactos nacionales e internacionales. Una conducción enérgica, asistida por un buen equipo, mucho puede hacer para remediar los males de larga data que aquejan a la inteligencia argentina. El organismo tiene buenas capacidades técnicas que es preciso preservar.

Mientras tanto, tal vez la reflexión y el tiempo permitan madurar una reforma legal que elimine o disminuya la concentración de funciones en un determinado organismo de inteligencia, establezca controles eficaces en el seno del órgano ejecutivo –como sucede en aquellos países que han sabido solucionar los dilemas que la actividad de inteligencia plantea al sistema democrático, contando con sistemas de inteligencia eficaces y bien controlados– limite

cuidadosamente las competencias en materia de inteligencia interior, distinga acabadamente entre la actividad de inteligencia y la inteligencia criminal, elimine la posibilidad de actuación de personal de inteligencia en el proceso penal, perfeccione el control externo legislativo, concluyendo con el requisito de la autorización por el jefe del máximo organismo de inteligencia para el acceso del órgano de control a información clasificada –que, en los hechos, determina que el control queda sujeto a la voluntad del controlado–.

La construcción de un consenso sobre estos temas requiere tiempo. Cabe aguardar que una decidida conducción política con adecuada asistencia profesional, permita superar los problemas que determinaron a la autoridad política argentina a producir los cambios antes indicados.

* José Manuel Ugarte es Doctor de la Universidad de Buenos Aires (área Derecho Administrativo) y profesor de grado y posgrado en dicha Universidad, así como profesor en la Maestría en Derecho Administrativo de la Universidad Abierta Interamericana, Profesor de la Escuela de Defensa Nacional y del Instituto Universitario de Seguridad Marítima. E-mail manugart@gmail.com

Notas:

1. Entre decenas de publicaciones, remitimos a dos, de épocas muy diferentes: al contenido de nuestro ensayo titulado “Sistema Nacional de Inteligencia argentino, ¿cambiar ya?”, Latin American Studies Association, LASA 2000, Miami, 2000, hoy disponible en <http://www.fas.org/irp/world/argentina/cambiar.htm> (acc. 2.2.2015), y el capítulo correspondiente a Argentina de nuestro libro “El control público de la actividad de inteligencia en América Latina, Ediciones CICCUS, Buenos Aires, 2012.
2. Entrevista concedida al diario Perú 21, 15 de mayo de 2013.
3. La República, Lima, Lo que debes saber sobre el reglaje de la DINI a políticos, nota de María Isabel Álvarez.
4. En algunos países latinoamericanos, vigilancia.
5. Ibidem. V. también Congreso investigará actos denuncia a personajes políticos, La República, 19 de enero de 2015; Espías pertenecen al módulo de inteligencia operativa de la DINI, Ángel Páez y Doris Aguirre, La República, 20 de enero de 2015; Jefe de la DINI es citado al Congreso por presunto reglaje, El Comercio, Lima, 15 de Enero de 2015, entre otros.
6. Ibidem.
7. La República, Lima, 9 de febrero de 2015, Ana Jara anunció el cierre de la Dirección Nacional de Inteligencia.

8. V. especialmente La Semana de Bogotá, artículo Chuzadas: así fue la historia, 8 de febrero de 2014, disponible en <http://www.semana.com/nacion/articulo/chuzadas-asi-fue-la-historia/376548-3> acc. 4.2.2015. También, El Colombiano de Bogotá, 4 de febrero de 2014, www.elcolombiano.com/escandalo_por_supuestas_chuzadas_a_negociadores_de_la_habana-PWEC_280582 (acc. 4.2.2015).
9. El caso de Andrómeda determinó una investigación militar que mostró seriedad y voluntad de rectificación por parte de las Fuerzas Armadas. También se demostró la voluntad del Presidente Santos de proseguir el camino de fortalecimiento institucional iniciado con la disolución del DAS, disponiendo el relevo del general Mauricio Zúñiga, jefe de inteligencia del Ejército, y del general Jorge Andrés Zuluaga, jefe de la Central de Inteligencia Técnica del Ejército (CITEC). De la investigación militar surgió el relevo e inclusive el pase a retiro de personal militar. V. La Semana, 24 de Enero de 2015, El informe que sacudió el caso de la fachada Andrómeda. La condena del hacker Andrés Sepúlveda, actor central en la filtración de documentos secretos del Ejército, a diez años de prisión, así como las condenas a tres de los participantes del caso Andrómeda, contribuyen a advertir la gravedad de estos episodios, pero también la capacidad de reacción del Estado frente a ellos.
10. La Semana, 27 de septiembre de 2014, Los documentos secretos del Ejército Nacional.
11. V. La Nación, 22 de diciembre de 2014, La ex SIDE: temible disputa entre los dueños del medio, Carlos Pagni.
12. Página 12, 17 de diciembre de 2014, Los espías con conducción nueva, Raúl Kollman.
13. Ibidem.
14. Página 12, 21 de diciembre de 2014, Oportuno, necesario y tardío, Horacio Verbitsky.
15. Ibidem.
16. La Política On Line, 26 de enero de 2015, obtenido en <http://www.lapoliticaonline.com/nota/86485/> acc. 6.2.2015.
17. Sobre estos aspectos, V. Página 12, 17 de diciembre de 2014, Los espías con conducción nueva, Raúl Kollman.
18. Página 12, 19 de diciembre de 2014, Parrilli pone la casa en orden.
19. Entre muchas fuentes, Clarín del 27 de enero de 2015, Cristina rechazó la denuncia de Nisman y habló de un asesinato.
20. Mensaje y proyecto de ley N° 143, del 29 de enero de 2015.
21. Dictamen de las Comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia y Asuntos Penales del 4-431febrero de 2015, Expediente N° PE-431/2014.
22. Media sanción del Senado, del 12 de febrero del corriente. Es de destacar que dada la prisa impuesta al trámite, parece poco probable que se introduzcan modificaciones en la Cámara de Diputados.
23. V. sobre la Ley N° 25.520 –cuya comisión redactora integramos– nuestros artículos Análisis de la Ley de Inteligencia Nacional, obtenido en http://www.fas.org/irp/world/argentina/ugarte_ley.htm acc. 6.2.2015, Nueva Ley de Inteligencia, publicado en La Nación, 14 de diciembre de 2001, y especialmente el capítulo sobre Argentina de El

Control Público de la Actividad de Inteligencia, Ediciones CICCUS, Buenos Aires, 2012. Sobre la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal, V. nuestro trabajo Panorama de la Inteligencia Criminal Latinoamericana, Revista URVIO N° 15, Quito, disponible en <http://revistas.flacsoandes.edu.ec/urvio/article/view/1586/1251> (acc. 6.2.2015)

24. Esta medida fue objetada por la oposición política, arguyendo que la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, obedecería las instrucciones del Gobierno. Aún cuando por

mera hipótesis se supusiera que ello sería así, resulta evidente la ventaja de que el control quede a cargo de una funcionaria del Ministerio Público, con trayectoria en derecho y responsabilizable fácilmente por hipotéticas fallas, en lugar de residir en un organismo de inteligencia con personal, fuentes y medios secretos, e incluso instalaciones de problemática inspección.

25. V. sobre estos aspectos, nuestros trabajos Panorama de la inteligencia criminal latinoamericana (previamente citado) y La inteligencia criminal

latinoamericana a fondo, Revista AA Inteligencia, disponible en <http://www.phibetaiota.net/wp-content/uploads/2013/03/AAIMAR-ZO2013.pdf> (acc. 6.2.2015)

26. V. de José Manuel Ugarte, Panorama de la inteligencia criminal latinoamericana, previamente citado.

REPORTAJE:

LOS SERVICIOS DE INTELIGENCIA SUDAMERICANOS EN ALERTA ROJA

Susana Espinosa Soto*

Durante los primeros meses de 2015, en Sudamérica varios escándalos relacionados con servicios de inteligencia e investigación criminal han revelado una serie de problemas a nivel institucional. Ejemplos de eso son los casos del fiscal Alberto Nisman y la causa AMIA (en Argentina), el juicio contra María del Pilar Hurtado, ex directora del Departamento Administrativo de Seguridad (en Colombia), y la disolución del servicio secreto por denuncias de abuso y espionaje a políticos opositores al gobierno de Ollanta Humala (en Perú).¹

Las razones o causas de estos problemas en la región, tienen que ver con la deficiente institucionalización de este tipo de servicio estatal, su profesionalización, la manipulación política y la ausencia de control democrático a las diversas agencias. La globalización ha traído una serie de nuevas amenazas y dinámicas que son un desafío para las instituciones públicas de seguridad, que deben adaptarse constantemente.² A continuación, se presentarán los casos que han cobrado relevancia en la opinión pública sudamericana.

CASO ARGENTINA

Fiscal Alberto Nisman y la causa AMIA
La causa AMIA hace referencia al ataque a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, en 1994. Producto de

este atentado, causado por un coche bomba, 85 personas resultaron muertas y más de 300 heridas. La investigación del caso no ha obtenido resultados concretos, y dada la magnitud del atentado, ha contado con toda la visibilidad mediática e internacional durante ya 21 años.³

Inicialmente, se asignó el caso al juez, Juan José Galeano, quien estuvo involucrado en la detención de sospechosos que no tenían suficientes pruebas en su contra, testigos falsos, y otras pistas que no llevaron a resultados concretos. Al cabo de los primeros años de investigación, el juez Galeano se implicó en el traspaso de más de 400 mil dólares a uno de los acusados a cambio de lograr la inculpación de otro, para obtener prueba contundente frente al escrutinio público del caso. Galeano fue juzgado por este soborno y se lo desvinculó del caso.⁴

La investigación en su conjunto ha estado rodeada de intereses y controversias que han sacado a la luz aseveraciones de especialistas de EEUU e Israel, y señalando el caso como uno de los más grandes ataques a la comunidad judía desde la Segunda Guerra Mundial. Los especialistas de las agencias de inteligencia de los respectivos países, se trasladaron a Argentina para colaborar con las investigaciones.⁵

Por su parte, la INTERPOL, dictó circular roja para capturar a los principales sospechosos de nacionalidad iraní. A partir de entonces, los gobiernos argentinos, en especial desde la presidencia de Néstor y luego de Cristina Kirchner, procuraron solucionar el caso de manera diplomática con Irán para anular esas boletas de captura y mantener la armonía en las relaciones bilaterales. Por esto, el Canciller argentino Héctor Timerman, buscó desde enero de 2011, desvincular a los iraníes del caso.⁶

El fallecido Presidente, Néstor Kirchner, luego de diez años del atentado y la falta de información contundente, creó en 2004 la Unidad Especial de la Causa AMIA, a cargo de la Procuraduría de la Nación y designó al fiscal Alberto Nisman como jefe de la Unidad. Entre 2004 y 2014, el equipo de investigación no obtuvo mayores resultados, evidencias ni pistas concretas. Sin embargo, durante los 20 años de investigación se siguieron más de 200 pistas (Documento, 2006). Nisman continuó con la hipótesis de que los culpables del atentado son ciudadanos iraníes vinculados con la organización islamista Hezbollah, tal como lo sostienen las diplomacias de Israel y EEUU. Un sector de la opinión argentina sostiene que Nisman protegía, dentro de su investigación, intereses de estos dos países y por eso se ocupó de comprobar esa hipótesis.⁷

EL proceso da un giro desde el 14 de enero de 2015, cuando el fiscal Alberto Nisman asiste a un canal de televisión argentina y sostiene contar con pruebas suficientes en contra la presidenta Cristina Fernández y del canciller Héctor Timerman, para probar que estos funcionarios estaban encubriendo a los presuntos perpetradores del atentado, ciudadanos iraníes. Durante una entrevista el comenta que su denuncia formal la va a presentar el día 19 de enero de 2015 ante la Cámara de Diputados.⁸

Pero, el “(...) 18 de enero de 2015, el fiscal Alberto Nisman, al frente de la Unidad Especial que investigaba la causa AMIA, fue encontrado muerto con un disparo en la cabeza, en el baño de su departamento y las puertas de su casa cerradas por dentro”. Su muerte se produjo un día antes de la convocatoria de la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados para brindar información sobre la imputación que realizó a la presidenta Cristina Kirchner y su canciller Héctor Timerman por el delito de “encubrimiento” en el marco de la causa AMIA.¹⁰

Según el informe elaborado por los peritos contratados por la familia del fiscal Nisman, existen pruebas suficientes para comprobar que no se trató de un suicidio sino de un asesinato. Sostienen esta premisa desde evidencias como la posición en que fue encontrado el cadáver, el lugar donde se encontró el arma, la ausencia de residuos de explosivos y metales pesados en la mano del fiscal que presuntamente accionó el arma, entre otras. Este informe, presentado en marzo de 2015, tiene profundas diferencias con la autopsia oficial realizada por el Cuerpo Médico Forense, que depende de la Corte Suprema de Justicia.¹¹

El viernes 13 de marzo de 2015, circuló en la prensa argentina la información de que el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, ordenó la desclasificación

de los documentos de la Causa AMIA. La Presidenta había ordenado a Oscar Parrilli, Secretario de inteligencia, que brinde colaboración a la jueza Servini desclasificando los datos relacionados con la investigación dando así cumplimiento al pedido de Nisman antes de su muerte. La Presidenta sostiene que su orden la impartió días antes de la muerte del fiscal.¹²

Agencia Federal De Inteligencia - Argentina

A través del Decreto 337/2015 del Poder Ejecutivo de la República de Argentina, se promulgó la normativa sancionada por el Congreso que permite avanzar en la disolución de la Secretaría de Inteligencia para ser reemplazada por una Agencia Federal de Inteligencia (AFI).¹³ En efecto, el texto sostiene que algunas de las funciones de la AFI tendrán por objetivo “la producción de inteligencia nacional mediante la obtención, reunión y análisis de la información referida a los hechos, riesgos y conflictos que afecten la defensa nacional y la seguridad interior, a través de los organismos que forman parte del sistema de inteligencia nacional”.¹⁴

La incorporación de los partidarios del kirchnerismo más radical a las filas de la ex Secretaría de Inteligencia se produce como parte de la anunciada “democratización” de los servicios de espionaje que prometió la Casa Rosada, que también impulsó la reforma de la ley nacional de inteligencia y la creación de la AFI, aprobada el 01 de marzo de 2015.¹⁵

CASO COLOMBIA

En la década de 1960, durante la gestión de Alberto Lleras Camargo, y con asesoramiento de la CIA, nace el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) en Colombia. Desde entonces el DAS experimentó modificaciones institucionales, con miras al fortalecimiento organizacional. Los servicios secretos que desarrollaba el DAS entraron en crisis durante la administración del ex

Presidente Álvaro Uribe. En esa administración, los funcionarios, objetivos y métodos del DAS violaron los controles democráticos y el respeto a los derechos humanos. Esto hizo que la disolución del DAS sea una de suma importancia para refundar los servicios de inteligencia desde una plataforma democrática.¹⁶ En enero de 2015, María del Pilar Hurtado, ex directora del DAS, fue entregada a la justicia colombiana para ser juzgada por casos de violación a los derechos humanos. Ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía General solicitó que se le imponga una condena de 20 años de prisión por su responsabilidad en interceptaciones ilegales a magistrados, periodistas y congresistas de oposición durante la administración Uribe. Además solicitó que se le imponga una multa de 66 millones de pesos y una inhabilidad de 200 meses para ejercer cargos públicos.¹⁷

María del Pilar Hurtado fue sentenciada específicamente por dos delitos de falsedad ideológica en documento público, peculado por apropiación, actos arbitrarios e injustos, concierto para delinquir, abuso de función pública. La ex directora del organismo de seguridad continuará privada de su libertad en un calabozo del búnker de la Fiscalía.¹⁸

CASO PERÚ

El gobierno peruano decidió cerrar su servicio de inteligencia en medio de un escándalo de espionaje. La decisión fue adoptada poco después de que surgieran denuncias de que la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI) espía a políticos de la oposición y a la propia vicepresidenta Marisol Espinoza, distanciada del gobierno.¹⁹

Algunos analistas notan que es la segunda vez en los últimos tiempos que Perú busca reorganizar su oficina nacional de espionaje, lo cual sugiere que existe un problema institucional irresuelto. En el año 2000 dejó de funcionar el entonces Servicio de Inteligencia Nacional

(SIN), que bajo el gobierno de Alberto Fujimori fue utilizado por su poderoso espía jefe, Vladimiro Montesinos, para cometer diversos abusos.²⁰

El presidente peruano, Ollanta Humala, prometió investigar el incidente, que data de noviembre de 2014. El gobierno negó haber espiado a Espinoza o a opositores. Sin embargo, en enero fue

sustituido el director de la DINI, quien al igual que su reemplazante, Javier Bri-ceño, estuvo en la misma promoción de la Escuela Militar que Humala, un teniente coronel retirado del Ejército.²¹

INSTITUCIONES VIGENTES DE INTELIGENCIA EN LOS PAÍSES DE AMÉRICA DEL SUR

PAÍS	INSTITUCIÓN DE INTELIGENCIA	AÑO DE INICIO
Argentina	Agencia Federal de Inteligencia (AFI)	2015
Bolivia	Dirección de Inteligencia del Estado Plurinacional (DIEP)	2010
Brasil	Agência Brasileira de Inteligência (ABIN)	1999
Colombia	Dirección Nacional de Inteligencia (DNI)	2011
Chile	Agencia Nacional de Inteligencia (ANI)	2004
Ecuador	Secretaría Nacional de Inteligencia (SENAIN)	2009
Paraguay	Dirección de Inteligencia (DI)	2003
Perú	Dirección Nacional de Inteligencia (DINI)	2006
Uruguay	Dirección Nacional de Inteligencia de Estado (DINACIE)	1999
Venezuela	Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN)	2010

Fuente: (Intelpage.info, 2015) Elaborado por: Susana Espinosa Soto (Programa DSD-PUCE)

* Investigadora del Programa Democracia, Seguridad y Defensa, PUCE

Referencias:

1. Infolatam. (2015). Información y Análisis de América Latina. Recuperado el 2015, de <http://www.infolatam.com/2015/02/13/los-servicios-secreto-en-america-latina-siguen-en-la-zona-oscura/>
2. Ibid.
3. Documenta. (2006). YouTube. Recuperado el Marzo de 2015, de Documenta - Terror en Bs As, atentado a La AMIA : <https://www.youtube.com/watch?v=G0YwcfriQQM>
4. Ibid.
5. Calloni, S. (5 de Marzo de 2015). Red Voltaire. Obtenido de <http://www.voltairenet.org/article186984.html>
6. A dos voces. (15 de Enero de 2015). YouTube. Recuperado el Marzo de 2015, de A Dos Voces - Alberto Nisman - Encubrimiento del Gobierno Argentino al Atentado AMIA - 14-01-2015 : <https://www.youtube.com/watch?v=4nFQ7AsXmf8>
7. Op. Cit. Calloni, 2015.
8. Op. Cit. A dos voces, 2015.
9. Op. Cit. Calloni, 2015.
10. La Nación. (14 de Enero de 2015). El fiscal Al-

berto Nisman irá al Congreso para informar sobre la imputación a Cristina Kirchner y Timerman. La Nación, págs. <http://www.lanacion.com.ar/1760054-el-fiscal-alberto-nisman-ira-al-congreso-para-informar-sobre-la-imputacion-a-cristina-kirchner-y-timerman>.

11. Rodríguez Niell, P. (12 de Marzo de 2015). Para los peritos de la familia, Nisman estaba de rodillas al recibir el tiro. La Nación, págs. <http://www.lanacion.com.ar/1775450-para-los-peritos-de-la-familia-nisman-estaba-de-rodillas-al-recibir-el-tiro>.
12. La Nación. (13 de Marzo de 2015). El Gobierno oficializó la desclasificación de la documentación de la causa AMIA. La Nación, págs. <http://www.lanacion.com.ar/1775823-el-gobierno-oficializo-la-desclasificacion-de-la-documentacion-de-la-causa-amia>.
13. Portal Oficial del Gobierno de la República Argentina. (13 de Marzo de 2015). Portal Oficial del Gobierno de la República Argentina. Obtenido de <http://www.argentina.gob.ar/noticias/3371-entra-en-vigencia-la-agencia-federal-de-inteligencia.php>

14. Ibid.

15. Alconada Mon, H., & Dapelo, S. (28 de Febrero de 2015). El Gobierno recluta militantes para la nueva Agencia de Inteligencia. La Nación, págs. <http://www.lanacion.com.ar/1772264-el-gobierno-recluta-militantes-para-la-nueva-agencia-de-inteligencia>.
16. Serrano Torres, J. (25 de Mayo de 2005). La comunidad de inteligencia colombiana. Red Voltaire, págs. <http://www.voltairenet.org/article124392.html>.
17. El Espectador. (5 de Marzo de 2015). Fiscalía pide 20 años de cárcel para María del Pilar Hurtado. El Espectador, págs. <http://www.elspectador.com/noticias/judicial/fiscalia-pide-20-anos-de-carcel-maria-del-pilar-hurtado-articulo-547689>.
18. Ibid.
19. BBC Mundo. (2015). BBC Mundo. Obtenido de http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2015/02/150210_peru_espionaje_cierre_porque_gl
20. Ibid.
21. Ibid.

CRONOLOGÍA DE NOTICIAS: DICIEMBRE 2014 – MARZO 2015

SEGURIDAD CIUDADANA

Avances en Derechos Humanos son debatidos en el Seminario Internacional 'Verdad, Justicia y Reparación'. En el seminario organizado por la Fiscalía General del Estado y la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), el Fiscal General del Estado, Galo Chiriboga, destacó el trabajo de la Comisión de la Verdad, que investigó las

violaciones a los derechos humanos en el periodo 1984-2008. Los resultados indican que el 68% de los casos investigados pertenece al régimen del expresidente León Febres Cordero (1984-1988). Los delitos fueron: tortura, detención arbitraria, violencia sexual, desaparición forzada, y ejecuciones extra judiciales. *Diario El Telégrafo. 09/12/2014.*

Ecuador es el tercer país del mundo con mayor número de decomisos de alcaloides, y es considerado una ruta para el narcotráfico internacional. De enero a diciembre de 2014 han sido decomisadas 55 toneladas de droga en Ecuador. El 87% de los decomisos de droga en el año 2014 corresponde a tráfico internacional, mientras que el 13% corresponde a tráfico interno. La Oficina

de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) destacó en su último informe que Ecuador es el tercer país del mundo con más decomisos de alcaloides, pues es un país atractivo para las bandas del narcotráfico dado que las alertas internacionales de la Policía Antinarcóticos son más altas cuando las cargas provienen de Colombia o Perú. La Comunidad de Policías de América (AMERIPOL) indica que hay falencias en los controles aduaneros. Según la UNODC más de 500 millones de contenedores circulan en el mundo anualmente y menos del 2% son inspeccionados. *Diario El Comercio*. 11/12/2014.

El 91% de las desapariciones reportadas de personas fueron resueltas durante el año 2014. En este año en Ecuador fueron reportadas como desaparecidas 4.592 personas, de las cuales 4.184 fueron encontradas entre vivas o muertas. Esto representa un 91% de respuesta, según reportes de la Dirección Nacional de Delitos Contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestros (DINASED). El reporte de la DINASED evidencia que las denuncias aumentaron en el año 2014 a 2.315, mientras que en el 2013 datan 2.277 casos, de los cuales se resolvió el 45%, conforme con los reportes de la Policía Judicial. En el año 2015 aumentarán las campañas preventivas. *Diario El Telégrafo*. 28/12/2014.

La tasa de homicidios a nivel nacional se redujo de 10.8 a 8.0 por cada 100 mil habitantes en el año 2014. Según el Ministerio del Interior en 2013 la tasa de homicidios fue de 10.8 por cada 100.000 habitantes, en 2014 bajó a 8.0. Para 2015, se dispuso USD 617 millones del presupuesto del Estado para la seguridad integral del país; el plan con este objetivo concluirá en el año 2017. *Diario El Telégrafo*. 31/12/2014.

Instituciones a nivel nacional en conjunto, fortalecerán la lucha contra el microtráfico y consumo de sustancias estupefacientes en el año 2015. La

Subdirección Nacional contra el Microtráfico de Drogas, creada por el Ministerio del Interior en noviembre de 2014, pretende erradicar el expendio de estupefacientes en escuelas, colegios, calles y espacios públicos del territorio ecuatoriano. La lucha contra el microtráfico fue prioridad para la Dirección Nacional de Antinarcóticos (DNA) durante el 2014 y se extenderá hasta el 2015. José Serrano, Ministro del Interior, afirmó que en 2015 el objetivo será desarticular las bandas de narcotráfico que operan en las afueras de los planteles educativos del Ecuador. Como parte del plan estratégico nacional y modelo de atención de salud mental, se crearán 11 centros especializados de tratamientos de adicciones (CETAD). El Ministerio del Interior, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y la Dirección Nacional de Antinarcóticos trabajan en la formación de facilitadores con liderazgo en prevención de drogas, y la elaboración de Manuales de Prevención con enfoque de Derechos Humanos y género. *Diario El Telégrafo*. 03/01/2015.

Crimen organizado capta agentes de la Policía Nacional en territorio ecuatoriano para facilitar el comercio y expendio internacional de drogas desde el país, como ruta estratégica para el narcotráfico. El Inspector General de la Policía, sostuvo que la posición geográfica ecuatoriana ubica al país como ruta de narcotráfico, por lo que el crimen organizado capta policías, militares, fiscales, jueces, y otros funcionarios de la seguridad ciudadana para viabilizar el transporte. Pese a esta amenaza, el Ministerio del Interior destaca los avances en la confianza ciudadana en la Policía. Un informe internacional ubica al Ecuador como el segundo país con mayor apoyo ciudadano a su política de seguridad. *Diario El Comercio*. 06/01/2015.

El principio de la favorabilidad beneficia a 1.685 personas privadas de libertad con la suspensión de su reclusión. De 1.685 personas que recuperaron su libertad al acogerse al principio

de favorabilidad con la vigencia del Código Orgánico Integral Penal (COIP) en agosto de 2014, el 60% cumplía una condena por tenencia de drogas. Desde la vigencia del COIP, se han efectuado 2.269 pedidos de audiencia para la aplicación del principio de favorabilidad en diferentes casos, y se aceptó el 78% (1.685) en 2.151 audiencias. En el caso del tráfico de sustancias estupefacientes, el COIP sanciona desde los 2 a 6 meses de prisión si es por mínima escala; de 1 a 3 años, mediana escala; de 5 a 7 años por alta escala; y de 10 a 13 años de reclusión por gran escala. *Diario El Telégrafo*. 14/01/2015.

Ante las amenazas de cibermafias, se conformó un Cibercomando y se fortalecen las vulnerabilidades de alteración de datos de las empresas del sector público y privado. En Ecuador, la protección contra las cibermafias se extiende ahora en empresas privadas y públicas. El informe de la Organización de Estados Americanos (OEA) advierte que en Ecuador, solo entre 2008 y 2013 los fraudes informáticos perpetrados a la población y a empresas aumentaron de 203 a 458. Por lo que en el año 2014 el Gobierno creó un Cibercomando y destinó USD 8 millones para ello. En las firmas que forman parte de la Cámara de Comercio de la ciudad de Quito también se adoptan estrategias, como la aplicación de paquetes informáticos que evitan la penetración de virus (malware) a través de correos electrónicos que llegan en cadena (spam). Con esto se fortalecen las seguridades que protegen datos confidenciales de industrias y supermercados. *Diario El Comercio*. 19/01/2015. **Delito informático masivo ataca a 17 empresas ecuatorianas.** Del 19 al 25 de enero de 2015, un virus informático calificado como "cryptolocker" se propagó en los servidores tecnológicos de 17 empresas privadas e instituciones públicas de las ciudades de Quito, Guayaquil y Cuenca. Los técnicos consideran que cryptolocker llega a los usuarios por correos electrónicos con información aparentemente útil. Se utiliza una falsa fachada con

el asunto del mensaje de 'Facturación electrónica'. El 'malware' se ha propagado en Ecuador desde el 1 de enero de 2015 en que se exige la emisión de facturas en formato digital. Datos oficiales revelan que entre los años 2008 y 2013, los delitos informáticos aumentaron del 203% al 458%, y el 58,94% de víctimas de estos delitos son personas naturales. *Diario El Comercio*. 25/01/2015.

Ante el incremento de procesos de lavado de activos, cooperarán con la Unidad Antilavado de Activos: la Unidad de Análisis Financiero, la Superintendencia de Bancos, Compañías, SRI, Aduanas y Fiscalía. En los 3 últimos años se presentaron 132 denuncias de lavado de activos en las diferentes fiscalías del Ecuador, de las cuales 30 procesadas recibieron una sentencia. En 2012 se registraron 30 procesos por este delito; 49 en 2013; y 53 en el 2014, que totalizan 132 causas por lavado de dinero. Como resultado se decomisaron 20 bienes que representan USD 850.000. Por tanto, la Unidad Antilavado de Activos trabajará junto con la Unidad de Análisis Financiero (UAF), bajo lineamientos establecidos en la Ley de prevención, detección y erradicación del delito de lavado de activos y del financiamiento de delitos, según el Código Orgánico Integral Penal (COIP). Cooperan la Superintendencia de Bancos, Compañías, SRI, Aduanas y Fiscalía. *Diario El Telégrafo*. 15/02/2015.

La red de Centros de Investigación y Ciencias Forenses se extendió en 6 provincias del Ecuador en el año 2014. En 2014 la Fiscalía General del Estado puso en funcionamiento 3 de los 8 Centros de Investigación de Ciencias Forenses (CICF) que forman una red de análisis de hechos delictivos. El Ministerio Público verificó el estado de varios anfiteatros y dispuso la clausura progresiva de las morgues que no estaban aptas para su funcionamiento. La Jefatura de Medicina Legal, la Dirección de Investigaciones y la Escuela de Fiscales están encargadas de organizar las jornadas de instrucción, y se dictaron varios cursos

sobre: peritaje, bioseguridad, manuales y protocolos de medicina legal, Derechos Humanos y comparecencia a juicios; además, de prácticas sobre análisis de muestras, interpretación de resultados, autopsias médico-legales, balística, patología, planimetría y antropología. *Diario El Telégrafo*. 22/12/2014.

POLICÍA NACIONAL

450 policías con discapacidad son reinsertados laboralmente en la Policía Nacional en tareas administrativas.

Entre los tipos de discapacidades que sufren los uniformados se cuentan las física, sicológica, visual y auditiva. Según estadísticas del ministerio del Interior, el 77% de las discapacidades en los uniformados son efecto directo de sus funciones, por ejemplo los operativos. En 2008 se creó la Unidad de Atención al personal policial con discapacidad, para dar soporte a los miembros en salud física, sicológica y emocional. El proceso de reinserción laboral de los uniformados que sufren alguna lesión en cumplimiento de su deber, es objetivo importante del programa. Los uniformados son destinados a tareas administrativas, ya sea en el departamento de Criminalística, en el Centro Integrado de Seguridad ECU-911, o en la docencia de Derechos Humanos. *Diario El Telégrafo*. 07/12/2014.

Todos los miembros de la Policía Nacional serán sometidos a pruebas de confianza cada 6 meses con el fin de expulsar a los agentes de la institución involucrados en presunto narcotráfico, y otros delitos. El Ministro del Interior, José Serrano, informó que los 45.000 agentes policiales deberán pasar por pruebas de confianza cada 6 meses; y deberán actualizar su patrimonio y el de sus familias, para evitar casos de testaferrismo. El Inspector General de la Policía, Juan Carlos Barragán, reiteró que los exámenes serán más rigurosos, especialmente para los aspirantes. Se s contempla pruebas de polígrafo, toxicología, entrevistas psicológicas, entre otras. El trabajo será complementado con labores de contrainteligencia que permitan de-

tecar casos de corrupción. Las medidas de depuración de la Policía Nacional resultaron luego del asesinato de René Morales, Jefe del Grupo de Operaciones Especiales (GOE) de la provincia de Esmeraldas, por cruce de balas contra otros dos agentes de la Policía, quienes llevaban droga de una red narcodelictiva a otro destino de distribución en un patrullero, el 4 de enero de 2014. *Diario El Universo*. 11/01/2015.

FUERZAS ARMADAS EN SEGURIDAD CIUDADANA

5.300 armas incautadas por las Fuerzas Armadas fueron destruidas. En las instalaciones de Andec-Funasa, en la ciudad de Guayaquil, se procedió con la destrucción de armas incautadas en operativos ejecutados por las Fuerzas Armadas, a través del Comando Operacional 2 'Marítimo' en la región costa. Fueron 5.300 armas de fuego y 3.540 accesorios entre pistolas, revólveres, carabinas, rifles, escopetas, miras, culatas, extensores, infrarrojos y silenciadores. La destrucción se da en cumplimiento con el Art. 4 literal b), numeral 5 del Reglamento a la Ley de fabricación, importación, exportación, comercialización y tenencia de armas, municiones, explosivos y accesorios, que autoriza "la eliminación de este material encontrando en tenencia ilegal". *Diario El Telégrafo*. 19/12/2014.

MILITARES Y MINISTERIO DE DEFENSA

Diez reformas en las Fuerzas Armadas constituyen los parámetros para cumplir con la Agenda Política de Defensa del período 2014-2017. El Ministerio de Defensa informa que las Fuerzas Armadas están en un período de transformación institucional y de reorientación de las funciones y capacidades de los uniformados en base a lo que plantea la Agenda Política de Defensa 2014-2017, que definió cuatro misiones para las Fuerzas Armadas: soberanía y defensa de la integridad territorial, participación en seguridad integral (interna y apoyo a desastres naturales), soporte al desarrollo, y la construcción de la paz regional

y mundial. Estas medidas se relacionan con la reducción de personal y reestructuración de las bases militares, con una inversión de USD 316,1 millones desde el 2015 hasta el 2017 para cumplir con las 10 reformas: 1) Reducción técnica de personal con disminución de ingresos de las escuelas de formación en un 50% anual; ejecución real de cuotas de eliminación del 15%, y un 2% de depuración institucional; 2) Reducción de las actuales 430 bases en el país para ubicarlas estratégicamente y equiparlas para defender la soberanía; 3) Innovación tecnológica con la adquisición de equipos y armamento de mayor calibre para la Fuerza Terrestre, y la recuperación de corbetas y la adquisición de helicópteros para la Fuerza Aérea Ecuatoriana; 4) Reducción del servicio militar de un año a seis meses y disminución del número de reservistas de 16.000 a 10.000 anuales; 5) Operación del Comando de Ciberdefensa para proteger y defender los sectores estratégicos del país que funcionan con sistemas informáticos. 6) Creación de la Unidad de Vigilancia Aduanera, la Comisión de Tránsito, de Guías Penitenciarios y Guardia Forestal; 7) Optimización en el uso de sus recursos y cooperación con la Policía en las tareas de seguridad interna frente a las amenazas que representan el crimen organizado, la delincuencia transnacional y el narcotráfico; 8) Redistribución de entidades que ascienden al personal militar: a los generales se dictarán a través de un decreto ejecutivo del Jefe de Estado, a los oficiales superiores y subalternos subirán de grado con acuerdo ministerial; y a los aspirantes a oficiales y del personal de tropa por orden del Comandante de cada fuerza; 9) Construcción de viviendas fiscales para reducir hasta el 2017 el déficit de vivienda fiscal para militares: el 70% de los casados y el 38% de los solteros; y 10) Solo el Presidente de la República se encargará de asignar las funciones del edecán y el tiempo que este permanecerá en el cargo. Los cargos de ayudantes del Ministro de Defensa, del Jefe del Comando Conjunto de las FFAA, y los comandantes de fuerzas se

ejercerán por un período no mayor a los dos años y por una sola vez en la carrera militar del oficial. *Diario El Comercio*. 04/01/2015.

Fuerza Aérea Ecuatoriana invirtió USD 400 millones para potenciar su flota. Desde el año 2008 al 2014 se han invertido más de USD 400 millones en 18 aviones subsónicos Súper Tucano, 12 supersónicos Cheetah y siete helicópteros DHRUV, de los cuales 3 están suspendidos de sus funciones y 4 accidentados. De los USD 1.974 millones invertidos en las tres ramas de las Fuerzas Armadas entre el 2007 y el 2014, la Fuerza Aérea ha recibido más equipamiento en relación con el Ejército y la Marina. *Diario El Comercio*. 01/02/2015. **Fuerza Aérea Ecuatoriana emplea las naves del Ejército para cumplir sus funciones. Desde el 2014 se adquirieron nueve unidades de la firma francesa Eurocopter para actividades de socorro.** El ministerio de Defensa informó que tras la caída de cuatro helicópteros DHRUV y el cese de las operaciones de las otras tres aeronaves, la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) utilizará la flota del Ejército y de la Aviación Naval. Sin los helicópteros DHRUV, la FAE quedó limitada para cumplir sus funciones. Entre el 2009 y 2015, esos helicópteros cumplieron cerca de 7.000 horas de vuelo. Las aeronaves cumplían, sobre todo, tareas de búsqueda y rescate en la región de la Costa y en la Amazonía. Su centro de operaciones era el Ala de Combate 22, en la ciudad de Guayaquil. El 10 de enero de 2015, la FAE utilizó un DHRUV en una de sus últimas tareas. Los DHRUV también cumplían con tareas aeromédicas y de traslado del Presidente de la República, Rafael Correa. El Ministerio de Defensa confirmó que desde el 2014, el Ejército adquirió nueve helicópteros a la firma francesa Eurocopter para reemplazar los DHRUV de firma india, para actividades de socorro. *Diario El Comercio*. 08/02/2015.

Reformas a la Ley de Personal de las Fuerzas Armadas. Las principales re-

formas que se incorporaron en la Ley de Personal de las FFAA son: 1) Solo los ascensos a generales se los concederá a través de Decretos Ejecutivos, mediante firma del Presidente de la República; 2) El ascenso a coroneles, capitanes, tenientes coroneles, mayores y oficiales subalternos se otorgará mediante Acuerdos Ministeriales; 3) Los ascensos de aquellos aspirantes a oficiales, personal de tropa y aspirantes a tropa los definirá el Comandante General de cada Fuerza. (Aérea, Naval, Terrestre). 4) Solo el Presidente de la República tendrá acceso a los edecanes. El Primer Mandatario será quien determine las funciones de estos oficiales y el tiempo de permanencia en el cargo (no superior a dos años); 5) El Jefe Militar de la Casa Presidencial ejercerá el cargo por una sola vez y por el período que el Presidente lo designe. El presidente Rafael Correa envió el proyecto el 21 de febrero del 2013. *Diario El Comercio*. 10/02/2015.

Empresa española dotará de radares a la Fuerza Aérea Ecuatoriana. Empresas de Francia, Italia y España presentaron ofertas para la compra de nuevos radares que reemplazarán a los de China adquiridos en el 2009 que no funcionaron. La empresa española Indra entregará los nuevos equipos por USD 80 millones. Son cuatro aparatos tipo 3D, que se ubicarán en puntos estratégicos del país con tecnología para detectar naves sin registro. Después del bombardeo colombiano a un campamento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en la provincia ecuatoriana de Sucumbíos el 1 de marzo del 2008 se declaró en emergencia a las Fuerzas Armadas y se adquirieron aviones, helicópteros y radares para la FAE, que no funcionaron debidamente. Los sitios en los cuales se ubicarán no pueden ser revelados por seguridad. La FAE advierte que esa tarea no es exclusiva de los radares, sino de un trabajo integral, que incluye aviones, automotores especiales e Inteligencia. La FAE tiene en su arsenal vehículos rusos OSA-AKM con sistemas electrónicos para reconocimien-

to y seguimiento por satélite. A esto se suman los aviones Súper Tucano para monitoreos diurnos y nocturnos con sistemas infrarrojos (FLIR) que ayudan a mantener la vigilancia de pistas no controladas, minería ilegal, etc. Además se cuenta con 12 aeronaves de alerta supersónicas Cheetah adquiridas a Sudáfrica, con radares de mediano alcance *Diario El Comercio*. 13/02/2015.

SUCESOS 30 DE SEPTIEMBRE

General Ernesto González publica información relacionada a los sucesos del 30 de Septiembre de 2010 y las operaciones de las Fuerzas Armadas. El general Ernesto González en su libro “Testimonio de un Comandante”, refiere a los eventos ocurridos el 30 de septiembre de 2010 (30-S), cuando miembros de la policía se insubordinaron. González estuvo ese día al frente de toda la fuerza militar. El General asegura que el presidente a pesar de estar en amenaza de muerte y retenido en el Regimiento Quito en la ciudad de Quito el 30-S, seguía ejerciendo sus funciones. *Diario El Comercio*. 13/01/2015. **Las declaraciones del General Ernesto González en su obra sobre los sucesos del 30 de septiembre de 2010, hacen reevaluar la validez de la hipótesis de secuestro e intento de golpe de Estado en estos eventos.** El Fiscal General hizo declaraciones adicionales que relatan el confuso rescate al primer mandatario, dijo que el exjefe militar utiliza la palabra “retenido” cuando habla de la permanencia del Jefe de Estado en la casa de salud. Con esta afirmación el Fiscal General manifestó su insistencia de que hubo intento de golpe de Estado, tesis que la ha reiterado desde el 2011. Tras las afirmaciones de González, la Fiscalía aseguró que se realizará una reconstrucción de los hechos. *Diario El Comercio*. 16/01/2015.

RELACIONES

ECUADOR – COLOMBIA

Presidentes de Colombia y Ecuador dan mayor realce a relación bilateral. Juan Manuel Santos, y Rafael Correa, tuvieron una reunión conjunta con sus

ministros para promover seis ejes estratégicos: infraestructura y conectividad, seguridad y defensa, económicos y comerciales, fronterizos, ambientales, y comerciales. Las delegaciones trataron sobre prevención ante delitos como la trata de personas, el narcotráfico, la minería ilegal y el contrabando. La frontera entre ambos países es de aproximadamente 700 km, entre la ribera en el océano Pacífico y la selva amazónica, a lo largo de la cual operan organizaciones armadas ilegales, contrabandistas de armas, drogas y combustibles. Ambos gobiernos restablecieron plenamente sus nexos diplomáticos en 2010 tras una severa crisis originada por un ataque militar colombiano contra las FARC en suelo ecuatoriano en marzo de 2008, dejando 25 muertos, incluido Raúl Reyes, el número dos de esa guerrilla. *Diario El Comercio*. 15/12/2014. **Colombia y Ecuador ratifican compromiso para la lucha contra crimen transnacional.** Los viceministros de Defensa de Colombia y Ecuador, examinaron el Plan de Acción de Seguridad y Defensa para 2015, que forma parte del III Gabinete Binacional celebrado en diciembre de 2014. Fueron 10 los compromisos firmados para el año 2015. Acordaron igualmente, hacer un seguimiento trimestral a los compromisos. *Diario El Comercio*. 07/02/2015.

RELACIONES ECUADOR – PERÚ
20 años después de la guerra del ‘Cenepa’ entre Ecuador y Perú en 1995, aún quedan por desminar 3 provincias ecuatorianas fronterizas. En proyecto de desminado empezó en el año 2000 tras la firma de la paz entre Ecuador y Perú. Desde el año 2009 se ha invertido 9,5 millones de dólares. No se han reportado nuevas detonaciones desde el año 2000. El terreno afectado fue delimitado con señalética de prevención, a pesar que al sector tan sólo se puede ingresar vía aérea o fluvial. Hasta ahora están desminadas las provincias de Loja y El Oro, pero faltan las provincias de Pastaza, Zamora y Morona Santiago. *Diario El Comercio*. 25/01/2015.

ECUADOR: RELACIONES INTERNACIONALES

Estados Unidos coopera en el rastreo de mafias de narcotráfico en Ecuador. El apoyo de (EEUU) lleva 30 años en Ecuador. A pesar de que esa nación cerró su oficina de cooperación antidroga en Ecuador en septiembre de 2014, por pedido del gobierno ecuatoriano, la coordinación sigue. En el año 2013, EEUU entregó a Ecuador aproximadamente USD 7 millones para capacitación técnica, mantenimiento de vehículos, seguridad y logística contra mafias narcotraficantes. En el 2014, la Fiscalía envió 17 pedidos de asistencia penal al Departamento de Justicia de EEUU. Uno fue por una indagación sobre tráfico de drogas y los demás son por lavado de activos, plagio o defraudación tributaria. *Diario El Comercio*. 01/03/2015.

ECUADOR: ORGANISMOS INTERNACIONALES

Ecuador pide reforzar la cooperación de seguridad en las Américas a la Organización de Estados Americanos (OEA). El Ministro ecuatoriano del Interior, José Serrano, llamó a reforzar la cooperación multilateral en materia de seguridad en las Américas, con un mayor intercambio de información entre los Gobiernos del continente y un énfasis en las acciones preventivas. Del 28 al 30 de enero de 2015, Serrano visitó la sede de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para dar un discurso ante el Consejo Permanente del organismo sobre los avances de seguridad en Ecuador y los desafíos al respecto en el continente. Respecto a la situación en el país, el Ministro destacó que, por primera vez en 30 años, Ecuador se encuentra entre los cuatro países con más confianza ciudadana en la seguridad interna en América Latina. *Diario El Comercio*. 28/01/2015.

Reseña: Redes Ilícitas y Política en América Latina

La organización IDEA Internacional, el Instituto Holandés de Relaciones Internacionales "Clingendael" y el Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria, presentan un estudio titulado: "Redes Ilícitas y Política en América Latina", editado en Estocolmo, Suecia, habiendo estado a cargo de la presentación del estudio del caso ecuatoriano en la región de Intag, la Dra. Bertha García Gallegos (Directora del Programa Democracia, Seguridad y Defensa), junto con la investigadora del Programa, Cristina Chuquimarca.

Reseña del libro:

La consolidación de la democracia en América Latina ha impuesto nuevos retos y caminos que transitar y enfrentar para mantenerla protegida. Combatir el crimen organizado es uno de ellos, ya que estas redes ilícitas no solamente han creado lazos con los funcionarios públicos sino que también han afectado profundamente el ejerci-

cio de los derechos de los ciudadanos y la autoridad de los gobiernos constitucionales en sectores vulnerables. El desarrollo de actividades



como el narcotráfico, el contrabando, la trata de personas o el tráfico de armas, requieren de la colaboración activa e incluso pasiva de las

autoridades, y el grado de dicha colaboración dependerá del tamaño del negocio. Sin duda estas redes que se establecen entre la política y los grupos criminales, quebrantan los principios democráticos de un Estado y establecen un régimen de terror que somete a las autoridades, pasando por encima de los intereses ciudadanos. "Redes Ilícitas y Política en América Latina" nos invita a identificar los más representativos casos de corrupción de los últimos tiempos, en países latinoamericanos como Colombia, México, Ecuador, Guatemala, Honduras y Perú. Además, intenta identificar el sistema bajo el que operan estas organizaciones, al punto de vulnerar el ejercicio del Estado de Derecho. Este estudio presenta una visión holística de la conformación de las alianzas entre los Estados, los políticos y las redes ilícitas en la región, con el fin de incentivar el debate sobre las políticas y normas que contribuyan al hundimiento de este fenómeno.



Comité Editorial:

- Bertha García Gallegos
- Francisco Rhon Dávila
- Juan Pablo Aguilar
- Marco Romero Cevallos

Asesoramiento Internacional:

- Dr. Gustavo Suárez Pertierra – UNED (España)
- Dr. Louis Goodman – American University (USA)
- Dra. Sonia Alda - Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado - España

Investigadores:

- Susana Espinosa Soto
- Emilia Banda Capelo
- Emilia Alvear Rodríguez
- Julián Soria Delgado

Programa Democracia, Seguridad y Defensa

Dirección: Av. 12 de Octubre y Patria. Universidad Católica. Torre 2, piso 9, oficina 901.

Teléfonos: (593-2) 299 1041 / (593-2) 299 1700 ext. 1474 / 1041

e-mail: bgarcia@puce.edu.ec

Correspondencia y solicitud de ejemplares: programa.dsd.puce@gmail.com

www.programadspuce.host56.com